



Trámite	Recurso de Anulación Laudo Arbitral
Convocantes	María Lucila Baena Campuzano y Maribel Parra Baena
Convocados	Seguridad Récord de Colombia Ltda. y Mario Alexander Parra Baena
Radicado	05001 22 03 000 2023 00039 00
Procedencia	Cámara de Comercio de Medellín
Instancia	Única
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Asunto	Sentencia Nro. 019
Decisión	Declara infundado
Tema	Recurso de anulación.
	<p>Por manera que es inane pretender el quebrantamiento del laudo alegando desconocimiento de la ley sustantiva, por la vía directa o indirecta o endilgarle a los árbitros error de hecho o de derecho que haya finalmente conducido a falta de aplicación, aplicación indebida o infracción de la ley. No existe desagravio judicial para corregir el desacierto cuando el tribunal falla, dejando de aplicar normas sustantivas que correspondían al caso. La doctrina y jurisprudencia nacionales pacíficamente han aceptado que el recurso de anulación tiene la finalidad de corregir errores <i>in procedendo</i> (violación de leyes procesales) pero nunca <i>in iudicando</i> (violación de la ley sustantiva) como sí se permite en casación.</p> <p>Causal 7ª. Se recuerda a las convocantes recurrentes que se ha expresado ya que una de las características de la anulación del laudo es la de ser un recurso destinado al control formal, como quiera que no está habilitado, por no ser medio ordinario, para ahondar de nuevo en la sustancia que fue materia de discusión en el arbitramento, sino para resolver acerca de la actividad <i>in procedendo</i> del Tribunal Arbitral, o, dicho de manera diversa, para verificar el cumplimiento de los requisitos formales a que debe obedecer el ente que juzga, por modo que los posibles yerros <i>in iudicando</i> son de suyo extraños a la censura misma, puesto que, se ha</p>

	<p>indicado, si tal revisión se permitiera, se desnaturalizaría la justicia arbitral, los pactos que le dan vida en cada caso concreto y el deseo legal de los particulares de sustraer de la jurisdicción la decisión del conflicto que los ata, como quiera que, entonces, el Tribunal Superior del Distrito Judicial que resolviera cada anulación, se convertiría en Juez de segundo grado judicial de un acto cuya extranjería frente a la organización de justicia estatal resulta evidente.</p> <p>Causal 9ª. <i>“Y en los aspectos relevantes de la causal glosada, destácase el atinente a la omisión de pronunciamiento sobre los aspectos sometidos a consideración del juzgador, la que se presenta cuando el fallo es deficitario en tanto deja de decidir alguna arista relevante del litigio, cortedad que resiente el derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, es asunto pacífico, que en línea de principio, la sentencia enteramente desfavorable a las pretensiones nada deja por decidir, pues según jurisprudencia de esta Corporación “distinto de no decidir un extremo de la litis... es resolverlo en forma adversa al peticionario. En el primer caso el fallo sería incongruente y, en consecuencia, podría ser atacado en casación con base en la causal segunda; en el otro no, puesto que el fallo adverso implica un pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensión de la parte, que sólo podría ser impugnado a través de la causal primera si con él se violó directa o indirectamente la ley sustancial. De lo contrario se llegaría a la conclusión de que el fallo sólo sería congruente cuando fuera favorable a las pretensiones del demandante, lo que a todas luces es inaceptable” (G. J. t. CXXXVIII, pág. 36).”</i> Lo anterior para definir que cuando las pretensiones de los convocantes no tienen éxito, no procede controvertir el laudo arbitral por <i>citra petita</i>, que es lo pretendido hoy por María Lucila Baena Campuzano y Maribel Parra Baena Se trata de uno de los problemas jurídicos que trató la rectora de la jurisdicción ordinaria en la sentencia parcialmente transcrita, y que formuló así: ¿es incongruente el laudo proferido por el tribunal de arbitramento al resolver las pretensiones del convocante?</p>
--	--

	<p>Ella misma se encarga de definir que ha decantado que, en principio, las sentencias completamente adversas a las pretensiones de la demanda no pueden caer en el defecto de incongruencia por <i>citra petita</i>, pues la denegación total de las peticiones excluye la posibilidad de haber omitido algún pronunciamiento en torno a los extremos litigiosos.</p> <p>Luego, como el laudo proferido el día 25 de noviembre de 2022, negó totalmente las pretensiones, como se indicó en la parte resolutive, no quedó, en palabras de aquél tribunal supremo, ninguna decisión pendiente de tomar, de donde puede deducirse que en la providencia arbitral no hubo incongruencia por este aspecto.</p>
--	---

2023-008

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA CUARTA CIVIL DE DECISIÓN

Medellín, veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

María Lucila Baena Campuzano y Maribel Parra Baena en los términos del artículo 40 y 41 de la Ley 1563 de 2012, interpusieron recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral proferido el 25 de noviembre de 2022 (en adelante el ‘Laudo’), emitido por el tribunal arbitral compuesto por los doctores Juan David Palacio Barrientos, Maximiliano Londoño Arango y Sergio Alberto Mora Gómez, (en adelante el ‘Tribunal’), en el proceso arbitral convocado por los recurrente en contra de la sociedad Seguridad Récord de Colombia Ltda. y Mario Alexander Parra Baena.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante demanda presentada el 2 de septiembre de 2021, solicitaron los actores al Tribunal de Arbitramento la declaración de

nulidad absoluta del documento “ACUERDO DE SOCIOS” del 6 de agosto de 2014 y de la escritura pública número 3995 del 17 de diciembre del mismo año de la Notaría 21 del Círculo de Medellín. Como pretensiones subsidiarias solicitó la declaratoria de inexistencia del acuerdo, y en su defecto de ineficacia. Con relación al instrumento público de manera subsidiaria la de ineficacia y en caso de desestimación de todas las subsidiarias petitionó que se declarara que el acuerdo demandado da cuenta de un claro ABUSO DE LA FIGURA SOCIETARIA por parte de los demandados. Y como “*CONSECUENCIAL DE LA PRETENSIÓN TERCERA SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN PRIMERA: Como consecuencia de la anterior declaración se ordene la eliminación del acuerdo societario.* III. *PRETENSIONES CONSECUENCIALES COMUNES PRIMERA COMÚN: Que se ordene a la Cámara de Comercio la cancelación del registro contentivo del acto escriturario atacado. SEGUNDA COMÚN: Que se ordene a la sociedad la cancelación del acuerdo de accionistas atacado*”.

2. A esas pretensiones se opusieron en su momento los convocados, así:

a) Seguridad Récord de Colombia Ltda. bajo la consideración de que el acuerdo se hizo entre los socios, con el depósito de rigor, bajo asesoría legal societaria de expertos, no fue impugnado, se puso en ejecución por siete años, nadie tuvo reparos (ni socios ni sus apoderados), por lo que ha operado los fenómenos de la caducidad y la prescripción. Que tiene plena validez, se soporta en la reunión de Junta de Socios bajo el Acta # 143 del 23 de octubre de 2014, y se pretende atacar por un flanco errático. Entre

otras cosas, la Cámara de Comercio hace control de legalidad que se pretermite por las demandantes. No puede haber desconocimiento de los propios actos. Ítem más: ¿Las escrituras se tumban? Se opuso a la declaratoria de abuso, pues en su concepto se actuó bajo equilibrio de socios con determinaciones en favor de uno de ellos, como una fórmula tranquila. Se ejecutó, se llevó a cabo y ahora todo es malo y defectuoso. Propuso las excepciones de prescripción de la nulidad absoluta, caducidad de la misma.

b) Mario Alexander Parra Baena también se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló la excepciones de prescripción de la nulidad absoluta; caducidad de la nulidad absoluta; improcedencia material de la nulidad absoluta del acuerdo y del instrumento público; improcedencia de la declaratoria de inexistencia; improcedencia de la declaratoria de ineficacia; improcedencia de la declaratoria de abuso de la figura societaria; excepción de divisibilidad; prohibición de ir contra los actos propios y falta de legitimación en la causa por activa.

II. EL LAUDO ACUSADO

Mediante la pieza que ahora es materia de acusación del día 25 de noviembre del 2022 negó el Tribunal las pretensiones.

III. LA PETICION DE ANULACIÓN

Inconformes las convocantes acudieron a la solicitud de anulación del laudo, apoyándose en las casuales 7 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, pues consideran que se falló en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, apareciendo dicha

circunstancia de manifiesto en el laudo y se dejó de decidir algunas cuestiones sujetas al arbitramento, causales invocadas que “se estructuran en dos líneas concretas a saber: (i) *Fallo en equidad*, (ii) *Fallo citra petita*”.

IV. CONSIDERACIONES

1. El recurso de anulación, extraordinario por antonomasia, define su fisonomía mediante el carácter limitado de los motivos de impugnación y de las providencias susceptibles de su ataque, así como por el control formal que encarna, en tanto no es permisible por esa vía acusar los yerros *in iudicando* del Tribunal, sino, únicamente, aquellos *in procedendo* en que se haya podido incurrir, razones por las que no es útil para impugnar con cimiento en fundamentos de libre condición, sino, únicamente, en aquellos a que se contraen las causales indicadas por el legislador en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, todo lo cual permite inferir, cual se anunció, las calidades de dispositivo y formal que lo caracterizan, tal como lo han entendido la doctrina y la jurisprudencia en reiteradas oportunidades, una de ellas la Sentencia de 13 de agosto de 1998. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles. Exp. No. 6903. “*con estructura básica equivalente, como lo ha indicado la Corte una especie de apelación extraordinaria, con pautas muy similares a las que rigen en el recurso de casación, pero limitado el apoyo del ataque a defectos “in procedendo”, es decir, únicamente para cuando se presenten desviaciones en la propia actuación de los árbitros que entrañe un verdadero abuso o desfiguración de los poderes que recibieron o del mandato que enmarca su tarea. Así, pues, ‘...por esta vía no es factible revisar las cuestiones de fondo que contenga el laudo*

ni menos aún las apreciaciones críticas, lógicas o históricas en que se funda el campo de la prueba, sino que su cometido es el controlar el razonable desenvolvimiento de la instancia arbitral' (Sent. Rev. 21 de febrero de 1996). Su naturaleza jurídica especial impide 'que la cuestión dirimida por los árbitros pueda se reexaminada por el tribunal superior que conozca de la impugnación. No se trata, pues, de un recurso para revisar o replantear lo que ya fue objeto de decisión mediante arbitramento, como que en el caso, entre otras cosas, muy fácil quedaría desnaturalizar la teleología de acudir a este tipo de administración de justicia, ciertamente en nada habría avanzado las partes...' (G.J.t. Pág.284)".

Por manera que, es inane pretender el quebrantamiento del laudo alegando desconocimiento de la ley sustantiva, por la vía directa o indirecta o endilgarle a los árbitros error de hecho o de derecho que haya finalmente conducido a falta de aplicación, aplicación indebida o infracción de la ley. No existe desagravio judicial para corregir el desacierto cuando el tribunal falla, dejando de aplicar normas sustantivas que correspondían al caso. La doctrina y jurisprudencia nacionales pacíficamente han aceptado que el recurso de anulación tiene la finalidad de corregir errores *in procedendo* (violación de leyes procesales) pero nunca *in iudicando* (violación de la ley sustantiva) como sí se permite en casación.

Ahora, como las causales de anulación son taxativas, no cualquier irregularidad o incongruencia del laudo es suficiente para invalidarlo, es necesario que se identifiquen las falencias o violaciones cometidas en desarrollo del trámite arbitral, causales

que se establecen de manera directa y taxativa en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 y que la Sala analiza en el orden propuesto por el recurrente.

2. Causal 7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.

Delanteramente advierte la Sala la improsperidad de esta causal, como toda la argumentación gira en torno a las normas sustantivas que el Tribunal aplicó para definir la excepción de prescripción.

En efecto, como se señala en el escrito contentivo de la impugnación extraordinaria, se alega que el Tribunal incurrió en yerro negativo puesto que, en palabras del recurrente, para declarar la prescripción básicamente señaló: *“a) Que la Ley 222 introdujo una norma especial de prescripción contenida en el artículo 235. b) Que la prementada norma regula la prescripción para todos los casos de nulidad. c) Que el término de prescripción, según dicha norma, es de cinco (5) años para todos los eventos de nulidad y abuso del derecho. d) Que según la Superintendencia de Sociedades el término de prescripción para la nulidad es el del artículo 235 citado. e) Que doctrinariamente, el Dr. Carlos Alberto Velásquez, señala que la nulidad por objeto y causa ilícita para acciones de impugnación de decisiones son saneables pasados cinco (5) años y que ello aplica para este caso”*¹

¹ Dijo el Tribunal: “Así las cosas, del contenido de la norma es claro para el Tribunal que, el término prescriptivo aplicable para las acciones civiles dirigidas en contra de un Acuerdo de socios -figura regulada en la ley 222 de 1995-, como las que se analizan (nulidad absoluta y abuso del derecho), es el de cinco (5) años regulado en esta norma especial. Teniendo en cuenta que la parte convocante ha formulado reparos relativos a la validez del Acuerdo de socios, pues pretende que se declare su

“En este orden de ideas, es claro que los señores árbitros incurrieron en un yerro negativo porque inaplicaron la norma que consagra el término de prescripción extintiva para la nulidad absoluta por objeto y causa ilícita –léase artículo 1742 del C.C.-. Tal como paso a demostrarlo los yerrores en que incurren los señores árbitros en el laudo atacado, en palabras de la jurisprudencia, son groseros, protuberantes, saltan de bulto, basta confrontar su decisión con el marco normativo aplicable al caso...”

Igualmente, que se incurrió en yerro positivo, porque los árbitros *“pusieron a decir al artículo 235 de la ley 222 de 1995 algo que no dice; en efecto, se aduce en el laudo que el artículo 235 citado expresamente consagra que el término de prescripción para la nulidad absoluta por objeto y causa ilícita es de cinco (5) años que no de diez (10) como lo consagra el artículo 1742 del C.C. y que bajo ese entendido es aquella la norma que debe aplicarse por ser posterior y especial.*

“La anterior afirmación constituye un yerro positivo pues aplicar una norma sobre un término de prescripción extintivo por vía de interpretación constituye no otra cosa que darle la espalda a la ley pues no puede un juez y/o árbitros crear una norma para un caso no contemplado por el legislador y el hacerlo torna el fallo en equidad, que no en derecho, pues obviamente no actúa en derecho quien le da la espalda a la ley”.

Finalmente, que hubo un alejamiento del precedente ya que *“la línea jurisprudencial vigente a la fecha de expedición del laudo da*

nulidad absoluta o en su defecto que “se deje sin validez” por el “ABUSO DEL DERECHO SOCIETARIO” (Pretensión Tercera subsidiaria de la Pretensión primera y Pretensión Consecuencial de esta), este término debe contarse desde su celebración, que es el momento en el cual se habrían configurado los vicios que denuncia la parte actora.”

cuenta que el término de prescripción para la nulidad absoluta por objeto o causa ilícita es el extraordinario y no puede, por vía de interpretación, restringirse, como se hace en el laudo, al término de prescripción ordinario, ciertamente, la Superintendencia de Sociedades frente al tema de la prescripción extintiva para la nulidad absoluta por causa ilícita expresamente tiene sentado en efecto en Concepto 220-050582 DEL 07 DE MARZO DE 2017”

Se recuerda a las convocantes recurrentes que se ha expresado ya que una de las características de la anulación del laudo es la de ser un recurso destinado al control formal, como quiera que no está habilitado, por no ser medio ordinario, para ahondar de nuevo en la sustancia que fue materia de discusión en el arbitramento, sino para resolver acerca de la actividad *in procedendo* del Tribunal Arbitral, o, dicho de manera diversa, para verificar el cumplimiento de los requisitos formales a que debe obedecer el ente que juzga, por modo que los posibles yerros *in iudicando* son de suyo extraños a la censura misma, puesto que, se ha indicado, si tal revisión se permitiera, se desnaturalizaría la justicia arbitral, los pactos que le dan vida en cada caso concreto y el deseo legal de los particulares de sustraer de la jurisdicción la decisión del conflicto que los ata, como quiera que, entonces, el Tribunal Superior del Distrito Judicial que resolviera cada anulación, se convertiría en Juez de segundo grado judicial de un acto cuya extranjería frente a la organización de justicia estatal resulta evidente.

3. Causal 9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.

Señaló la censura que existe fallo *citra petita* porque “Desde los albores de la demanda y el traslado de las excepciones se planteó el argumento de la improcedencia de la prescripción por la forma en que, en el caso de la señora Maribel Parra, *debían computarse los términos para dicha figura, según las voces de los incisos segundo y tercero del artículo 2529 del C.C., Modificado por el artículo 4º de la Ley 791 de 2012, Incisos éstos que por demás fueron declarados exequibles según sentencia C-204 de febrero 21 de 2001.*

En el laudo recurrido en anulación ni siquiera se analiza el tema planteado, basta leer la providencia atacada para concluir que en ésta brilla por su ausencia el análisis que ha debido hacerse, máxime que fue, y es, objeto del arbitramento, así se planteó en la demanda y en el escrito describiendo las excepciones propuestas”.

Al descubre el traslado de las excepciones, como se evidencia la transcripción de dicho escrito, se atacó el argumento de la prescripción de varias maneras, una de ellas el cómputo de los términos respecto de la señora Maribel Parra, quien vivía y vive fuera del país, afirmación ésta que fue debidamente acreditada dentro del proceso con la prueba documental y la testimonial, incluso los testigos presentados por parte demandada dieron cuenta de ello, y ésta situación a pesar de su importancia no fue analizada en el fallo cuestionado, lo que conlleva la anulación del fallo pues al haberse planteado este problema jurídico dentro del trámite arbitral correspondía al H. Tribunal hacer un análisis de este problema pero no, como lo hizo, hacer

caso omiso del mismo, ignorarlo por completo, darle la espalda al tema, guardar silencio y omitir su pronunciamiento, con el agravante que dicho cómputo tenía trascendencia directa en el fondo de la discusión pues al decretarse la prescripción extintiva necesario era el pronunciamiento frente al cómputo de los términos para las prescripción frente a la codemandada MARIBEL PARRA, lo que no se hizo, afectándose con ello, se itera, el principio de congruencia de la sentencia y de contera el derecho fundamental del debido proceso.

Sobre esta causal había señalado la Sala de Casación Civil que los árbitros no pueden fallar

"en asuntos que no le han sido demandados (extra petita), ni más allá de lo solicitado (ultra petita), como tampoco puede abstenerse de pronunciamiento alrededor de alguno de los extremos del litigio (citra petita), pues, en los dos primeros casos habrá incurrido en exceso de poder al ejercer la jurisdicción y, en el último, en defecto, que es lo que en la doctrina ancestralmente se conoce como el fallo omiso o diminuto". (sent. cas. civ. de 4 de septiembre de 2000, Exp. No. 5602).

“Y en los aspectos relevantes de la causal glosada, destácase el atinente a la omisión de pronunciamiento sobre los aspectos sometidos a consideración del juzgador, la que se presenta cuando el fallo es deficitario en tanto deja de decidir alguna arista relevante del litigio, cortedad que resiente el derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, es asunto pacífico, que en línea de principio, la sentencia enteramente desfavorable a las pretensiones nada deja por decidir, pues según jurisprudencia de esta Corporación “distinto de no decidir un extremo de la litis... es resolverlo en forma adversa al peticionario. En el primer caso el fallo sería incongruente y, en consecuencia, podría ser atacado en casación con base en la causal segunda; en el otro no, puesto que el fallo adverso implica un pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensión de la parte, que sólo podría ser impugnado a través de la causal primera si con él se violó directa o

indirectamente la ley sustancial. De lo contrario se llegaría a la conclusión de que el fallo sólo sería congruente cuando fuera favorable a las pretensiones del demandante, lo que a todas luces es inaceptable” (G. J. t. CXXXVIII, pág. 36).”²

Lo anterior para definir que cuando las pretensiones de los convocantes no tienen éxito, no procede controvertir el laudo arbitral por *citra petita*, que es lo pretendido hoy por María Lucila Baena Campuzano y Maribel Parra Baena. Se trata de uno de los problemas jurídicos que trató la rectora de la jurisdicción ordinaria en la sentencia parcialmente transcrita, y que formuló así: ¿es incongruente el laudo proferido por el tribunal de arbitramento al resolver las pretensiones del convocante?

Ella misma se encarga de definir que ha decantado que, en principio, las sentencias completamente adversas a las pretensiones de la demanda no pueden caer en el defecto de incongruencia por *citra petita*, pues la denegación total de las peticiones excluye la posibilidad de haber omitido algún pronunciamiento en torno a los extremos litigiosos.

Luego, como el laudo proferido el día 25 de noviembre de 2022, negó totalmente las pretensiones, como se indicó en la parte resolutive) no quedó, en palabras de aquél tribunal supremo, ninguna decisión pendiente de tomar, de donde puede deducirse que en la providencia arbitral no hubo incongruencia por este aspecto.

Pero si alguna duda cabe en torno a que lo que la decisión arbitral plasmó, se despeja con la simple lectura del contenido íntegro se

² Sent. Revisión Sala de Casación Civil C. S. de Justicia. 21 de julio de 2005. M.P. Edgardo Villamil Portilla. Expediente No. 1101-02-03-000-2004-00034-01

observa que analizó una a una las pretensiones y frente a la prescripción previamente resaltó que procedería a “establecer: i) *cuál es el término de prescripción aplicable al presente asunto para esos dos tipos de pretensiones (nulidad absoluta y abuso del derecho del Acuerdo de socios), es decir, si es el general de diez años regulado en el artículo 2356 del Código Civil, o si, por el contrario, es aplicable una norma específica que lo regule, sin olvidar lo dispuesto por el artículo 2545 del Código Civil, que establece que puede haber prescripciones de corto tiempo, y que estas corren contra cualquier persona; y ii) si en el caso que nos ocupa las Convocantes formularon esas pretensiones de nulidad absoluta y abuso del derecho de forma oportuna*

Corolario de lo expuesto se declarará infundado recurso extraordinario de anulación. Las costas de esta instancia correrán a cargo de la parte recurrente, contra quien se resuelve el recurso desfavorablemente, según lo establecido en el último inciso del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 y en el numeral 1.º del artículo 365 del C.G.P.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA

PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la parte convocante, María Lucila Baena Campuzano y Maribel Parra Baena contra el laudo arbitral proferido el 25 de noviembre de 2022 emitido por el tribunal

arbitral compuesto por los doctores Juan David Palacio Barrientos, Maximiliano Londoño Arango y Sergio Alberto Mora Gómez.

SEGUNDO: Condenar en costas a María Lucila Baena Campuzano y Maribel Parra Baena.

TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de Arbitramento.

Proyecto discutido y aprobado en acta 14 y sesión 46 del presente mes.

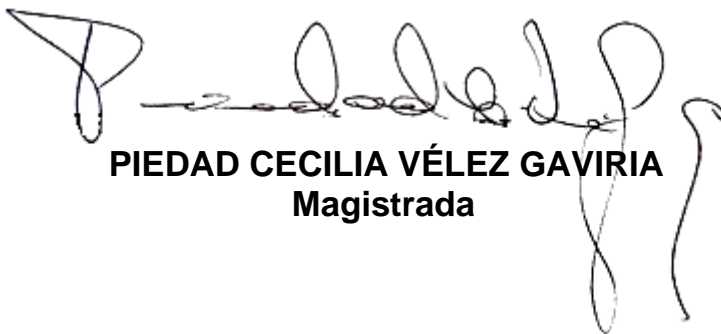
NOTIFIQUESE



JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado



JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
Magistrado



PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
Magistrada